



TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA DE CONOCIMIENTO DE JUSTICIA Y PAZ

Magistrada Ponente

CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO.

Radicados Sala: 08-001-22-52-003-2015-80638

Radicado Fiscalía: 11001-60-00253-2006-80638

Apróbadada Acta N° 061

Barranquilla, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015).

I. OBJETO DE DECISIÓN.

Resuelve la Sala la solicitud de *exclusión del trámite del proceso de Justicia y Paz*, del postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ** alias “Van Baxter” quien formó parte del extinto Frente Héroes Montes de María del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, presentada¹ y sustentada en desarrollo de audiencia pública por la Fiscalía Doce (12) Delegada de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional.

II. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULADO.

De los generales de ley e individualización.

MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 19.871.658 expedida en María la Baja (Bolívar), nació en Magangué – Bolívar, el 7 de mayo de 1971, hijo de Jorge Tomas Arrieta y Rosa Domínguez, casado con Edilsa Urruchurto, con quien tiene 5 hijos, escolaridad hasta noveno grado de bachillerato.

¹ Folios 5 y 6 del cuaderno del Tribunal.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Se trata de varón de 1.71 cms. de estatura, contextura atlética, tez trigueña oscura, cabello corto ondulado de color castaño oscuro, frente amplia forma rectangular, cejas pobladas lineales, ojos color café, nariz de base alta y dorso recto, boca mediana con labios regulares, orejas pequeñas de forma redonda lóbulo separado, mentón puntudo.

Para la constatación de la plena identidad del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, el ente instructor mostró los siguientes elementos materiales de prueba, mismos puestos a disposición de la Sala y partes, que son:

- Informe de consulta AFIS, con la tarjeta decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil - Dirección Nacional de Identificación.
- Hoja de Vida del desmovilizado, elaborada por el equipo de policía judicial del C.T.I., de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
- Imprimible del SIJYP de la hoja de vida del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ.
- Tarjeta Evidentix a nombre del Postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, elaborada por el C.T.I. a la fecha de su desmovilización.
- Obran los datos correspondientes a su identificación oficial con reporte de su cédula de ciudadanía.

Ruta criminal.

*Consejo Superior
de la Judicatura*

MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ alias "Van Baxter" ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2002, donde permaneció por un espacio de aproximadamente tres (3) años en el Bloque Montes de María de las A.U.C. siendo su comandante CARLOS CASTAÑO y comandante de frente UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, se desempeñó en la actividad de campanero, según versión libre rendida ante el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, el día 14 de Julio de 2005, en el municipio de María la Baja – Bolívar, donde se desmovilizó conjunta y voluntariamente bajo el mando de su máximo representante Edwar Cobos Téllez, alias "Diego Vecino" para reincorporarse a la vida civil, quedando libre en esa fecha al no tener requerimientos judiciales para esa oportunidad.

Advierte el ente acusador en la diligencia de audiencia pública, que el contexto del Bloque "Montes de María" ya ha sido incorporado en audiencias realizadas ante esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, dentro de la vista pública de Legalización de Cargos del postulado UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ y otros, en el radicado 08-001-22-52-000-2009-83530 y en la Audiencia Concentrada priorizada de casos, con el postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ y otros, en los radicados 11-001-60-00253-2003-82285; 11-001-60-00253-2008-83549; 11-001-60-00253-2008-83635 y 11-001-60-00253-2006-80848, radicados de la Sala No.: 08-001-22-52-000-2011-83758; 08-001-22-52-000-2011-82968 y 08-001-22-52-000-2014-82285.

Sostuvo la Dra. Cabarcas Castillo, Fiscal del caso, que, una vez efectuada la búsqueda en el Sistema de Información de Justicia y paz, se pudo constatar que no aparecen registrados hechos cuya comisión le sean imputables al postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**.

Como tampoco, se encontró relación de víctimas que lo refirieran o sindicaran como autor de conductas punibles, una vez realizado un filtro con las mismas, en el sistema de información y registro de la Unidad de Justicia y Paz SIJYP, no se reportan ningunas que lo fueran respecto de conductas realizadas por el postulado **ARRIETA DOMÍNGUEZ**.

En igual sentido no se encontró información relacionada con los bienes que pueda tener registrado el postulado **ARRIETA DOMÍNGUEZ**, a su nombre, además que de sus actividades se colige que no entregó ningún bien propio al momento de la desmovilización.

En relación a los antecedentes o anotaciones que pudiere registrar el postulado **ARRIETA DOMÍNGUEZ**, es allegado informe FPJ-11- fechado 4 de septiembre de 2015, signado por el funcionario de policía judicial Pedro Francisco Paternina Chávez, del C.T.I. U.N.F.E.J.T., quien manifestó haber realizado consultas en diferentes bases de datos y oficinas con el fin de indagar los procesos en los que el postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, se encontrara vinculado, obteniendo entre otros, respuestas de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo y el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa misma ciudad; sin registros de que al postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA**

DOMÍNGUEZ, a la fecha, cursaran investigaciones penales en esos despachos.

III. ACTUACIÓN PROCESAL.

Etapa administrativa:

1. Con escrito de fecha 10 de abril de 2006, el desmovilizado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, solicitó al Alto Comisionado para la Paz, su voluntad de ser postulado para acogerse al procedimiento y recibir los beneficios previsto en la ley 975 de 2005.
2. Acta de entrega voluntaria signada por el desmovilizado ARRIETA DOMÍNGUEZ y el Fiscal SABINO ALFONSO CABALLERO VILLAMIL, diligencia llevada a cabo en el corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja el día 9 de julio de 2005.
3. Auto calendarado 9 de julio de 2005, suscrito por SABINO ALFONSO CABALLERO VILLAMIL, Fiscal 4 Especializado de la Unidad Nacional del Terrorismo, en el cual se ordena escuchar en versión libre y espontánea al señor MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ.
4. Diligencia de versión libre rendida por el postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, ante los doctores SABINO ALFONSO CABALLERO VILLAMIL, Fiscal 4 Especializado de la Unidad Nacional del Terrorismo asistido por el Dr. RODIER DE JESÚS MEDINA, abogado defensor, el día 9 de julio de 2005.
5. Obra en el paginario resolución No. 00159 del 1 de julio de 2005, emanada del Despacho del Sr. Ministro del Interior y de Justicia, por medio del cual el Gobierno Nacional reconoce la calidad de miembro representante al señor EDWAR COBOS TÉLLEZ, para efectos de la coordinación de la desmovilización del Bloque "Montes de María" de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, en la que se desmovilizó el postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ.²

² Folios 4 y 5 ídem.

6. Oficio de fecha 15 de agosto de 2006, donde el Ministro del Interior y de Justicia para la época Dr. Sabas Pretelt De La Vega, remite al entonces Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Germán Iguarán Arana, listado de personas desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, para los efectos previstos en la ley 975 de 2005³.
7. Acta de reparto No. 011 del asunto seguido en contra de MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, del 8 de septiembre de 2006, al Despacho 12 de la Fiscalía para la Justicia y la Paz⁴.
8. Oficio UNJP No. 005461 calendado 18 de septiembre de 2006, signado por LUIS GONZÁLEZ LEÓN Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, para la fecha, por medio del cual remite un listado de 97 postulados que manifestaron su voluntad de acogimiento a la ley 975 de 2005, presentada ante el Alto Comisionado para la Paz, en cuya lista se encuentra el prenombrado postulado ARRIETA DOMÍNGUEZ⁵.
9. Milita oficio No. 8-00005237/AUV12300 de fecha 28 de enero de 2008, suscrito por el entonces Alto Comisionado para la Paz Dr. LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ, dirigido a quien fungía para esa fecha como Fiscal General de la Nación Dr. MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA, en el cual informa que el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, se desmovilizó en su condición de grupo armado organizado al margen de la ley, dentro del marco de la ley 782 de 2002, el día 14 de julio de 2005 en la zona de ubicación temporal del predio denominado “Pepe” ubicado en el corregimiento de San Pablo jurisdicción del municipio María la Baja del departamento de Bolívar, de igual manera con dicho oficio se adjuntó lista de personas desmovilizadas, del armamento entregado e información relacionada con los bienes entregados por el Extinto Bloque Montes de María.⁶
10. Acta de reparto No. 1035 de fecha mayo 13 de 2011, donde la jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, revoca la

³ Folios 10 a 12 ídem.

⁴ Folios 14 ídem.

⁵ Folios 15 a 23 ídem.

⁶ Folios 6 al 9 ídem.

asignación efectuada al despacho No. 32 y reubica en el despacho No. 11 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la asignación de 94 casos.

11. Acta de Apertura al procedimiento consagrado en la ley 975 de 2005, Orden No 042 adiada 14 de febrero de 2007, ante la manifestación de voluntad del postulado de sometimiento al procedimiento y beneficios de la citada Ley.

Etapa judicial:

Se realizaron sendos diligenciamientos y convocatorias realizadas a varios postulados entre ellos a MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, así:

1. Auto de apertura en virtud del acogimiento a la ley de Justicia y Paz del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, de fecha 14 de febrero de 2007, signado por INÉS PALTA MUÑOZ Fiscal 11 delegada ante el Tribunal Nacional para la Justicia y la Paz.
2. Copia de constancia de llamada telefónica realizada al postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, el día 27 de noviembre de 2010, con el fin de rendir diligencia de versión libre y decidir su permanencia o no dentro del proceso de Justicia y Paz, signado por el Dr. JAIME CHARRIS M. Fiscal Delegado 35.
3. Oficio de fecha 24 de diciembre de 2007, suscrito por WILLIAM HERNÁNDEZ MORA, Director Nacional de Facturación y Medios RCN Radio, en el que deja constancia del proceso de publicación del edicto emplazatorio que se le hizo al postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, para que compareciera a diligencia de versión libre, para lo cual se emitió la cuña No. 09 el día 2 de diciembre de 2007 a las 18:19 horas.
4. Orden de cumplimiento No. 11 de fecha 4 de febrero de 2014, suscrita por el Dr. VICENTE GUZMÁN HERRERA, en su condición de Fiscal Once (11) Delegado de la ahora Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de esta ciudad, en la que dispuso fijar fecha para la realización de diligencia de versión libre conjunta a unos postulados del Bloque Montes de

María entre ellos MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, para el día 21 de febrero de 2014 a las 8:30 a.m.

5. De dicha orden se desprendieron los oficios 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136/F-11/UNJP/LLF de fecha 4 de febrero de 2014, suscritos por el Dr. VICENTE GUZMÁN HERRERA, en su condición de Fiscal Once (11) Delegado de la ahora Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de esta ciudad, dirigidos a los Doctores JOSÉ IGNACIO JAIMES HERNÁNDEZ, Profesional Especializado II de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz de la ciudad de Bogotá D.C.; JUAN PABLO HINESTROSA VÉLEZ, Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz; MILTON GÓMEZ CARDOZO Defensor del Pueblo Seccional Atlántico; GERARDO GONZÁLEZ LLÍNAS, Procurador Judicial No. 43 Penal de esta ciudad; JORGE NOGUERA ZAMBRANO, Abogado de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad; DEFENSORA DEL PUEBLO Seccional Atlántico; ANA MORALES VALEGA, RAFAEL TORRES RESTREPO, ALFONSO PÉREZ GUZMÁN, ROSALBA CAÑAVERA ZAPATA y AUSBERTO RAFAEL BRUJES DAZA, de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad; NICOLASA GONZÁLEZ, Jefe de Prensa de la Fiscalía General de la Nación; al Director de Radio La Libertad de esta ciudad, a la señora DORIS JIMÉNEZ DE CANTILLO Directora Emisora Todelar Cartagena – Bolívar; a los PERSONEROS MUNICIPALES de Buenavista – Sucre, El Guamo – Bolívar y Sincelejo – Sucre; a los investigadores Criminalísticos de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de esta ciudad CARLOS MORENO, CARLOS DÍAZ PALACIOS y JOSÉ CLAVIJO VILLAMIZAR, respectivamente, oficios mediante los cuales se informó la fecha de versión libre conjunta para el día 18 de febrero de 2014 a las 8:30 a.m.
6. Acta de versión libre de postulados ausentes, incluido MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ y otros, de fecha 18 de febrero de 2014, donde se deja constancia de la no asistencia de estos postulados, y con permanencia de los Doctores VICENTE GUZMÁN HERRERA Fiscal 11 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, JORGE MIGUEL NOGUERA ZAMBRANO Defensor, GERARDO

JOSÉ GONZÁLEZ LLÍNAS Procurador 43 Judicial Penal II y JOSÉ CLAVIJO VILLAMIZAR Investigador Criminalístico VII – C.T.I.

7. Orden de cumplimiento No. 17 de fecha 25 de febrero de 2014, suscrita por el Dr. VICENTE GUZMÁN HERRERA, en la que dispuso fijar fecha para la realización de diligencia de versión libre conjunta a postulados del Bloque Motes de María entre ellos a MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, para el día 21 de marzo de 2014 a partir de 8:30 a.m.
8. Oficios sin numeración de fecha 26 de febrero de 2014, con el fin de comunicar a las prenombradas autoridades y personas la realización de diligencia de versión libre conjunta de los postulados del Bloque Montes de María, dentro de ellos MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, diligencia que se realizaría el día 21 de marzo de 2014 a partir de las 8:30 a.m.
9. Acta de versión libre de los postulados MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ y otros, de fecha 21 de marzo de 2014, donde se deja constancia de la no comparecencia de este postulado y otros, signada por los asistentes Dr. VICENTE GUZMÁN HERRERA Fiscal 11 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz y JOSÉ CLAVIJO VILLAMIZAR, investigador Criminalístico VII – C.T.I.
10. Oficio No. 006763 de fecha 16 de julio de 2014, suscrito por MARJEE LEANDRA CIFUENTES VILLARRAGA Auxiliar II adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, con sede en Bogotá D.C., mediante el cual envió separatas convocando por tercera vez a miembros desmovilizados que no han iniciado diligencia de versión libre, dando cuenta que en dicha separata se encuentra relacionado el postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ desmovilizado del Bloque Montes de María de la A.U.C.
11. Certificaciones signadas por el Dr. JUAN CARLOS OLIVEROS CORRALES Fiscal 10 Delegado de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, dadas en esta ciudad los días 30 de enero, 4 de marzo y 8 de abril de 2015, donde se hace constar que se citó a los postulados renuentes MARIO ENRIQUE ARRIETA

DOMÍNGUEZ y otros, desmovilizados del Bloque Montes de María, a través de edictos emplazatorios publicados en el Diario El Espectador, para esas mismas fechas, a efectos de rendir versión libre ante la actuante Fiscalía los cuales no comparecieron, sin mediar excusa al respecto.

12. De análoga manera fue descubierto en la vista pública por la señora representante del ente acusador el oficio No. 005283 de fecha 5 de mayo de 2015, suscrito por NANCY STELLA ANGARITA MARTÍNEZ, Coordinadora Grupo Administrativo de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, mediante el cual envió la documentación relacionada con los diligenciamientos realizados respecto del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ: i) Separata Original, ii) copia de la publicación del diario El Espectador del día 3 de febrero de 2015. iii) certificación emitida por parte de la Imprenta Nacional. iv) copia de la orden de servicio No. 40019 de la Imprenta Nacional. v) certificación del diario El espectador.
13. Copia fotostática de la orden de cumplimiento No. 003 de fecha 2 de junio de 2015, suscrita por la Fiscal del caso, Dra. JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO, en la que dispuso fijar fecha para la realización de diligencia de versión libre a unos postulados del Bloque Montes de María entre ellos MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, para el día 9 de junio de 2015 a las 9:00 a.m.
14. Oficios/DNFEJT/F-12/MCG/ Números 508-509-510-511-513 de fecha 4 de junio de 2015, suscritos por la Dra. JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO, dirigidos a los Doctores NICOLASA GONZÁLEZ Jefe de Prensa de la Fiscalía General de la Nación; GERARDO GONZÁLEZ LLÍNAS; ALBERTO ARIZA HERNÁNDEZ Coordinador de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional de Barranquilla; CARLOS FIDEL VILLAMIL RUIZ Director Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional; MILTON GÓMEZ CARDOZO Defensor del Pueblo Seccional Atlántico; a los señores MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ y otros como postulados, mediante los cuales se les dio aviso de la realización de la

diligencia de versión libre que se llevaría a cabo el día 9 de junio de 2015 a las 9:00 a.m.

15. Acta de diligencia de versión libre de los postulados reuents MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ y otros, de fecha 9 de junio de 2015, donde se deja constancia de la no asistencia de los postulados y signada por los asistentes Dra. JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO Fiscal 12 de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional, Dr. JORGE MIGUEL NOGUERA ZAMBRANO Defensor, Dr. GERARDO JOSÉ GONZÁLEZ LLÍNAS Procurador 43 Judicial Penal II y EDWIN BRAN APONTE Investigador Criminalístico IV – C.T.I.

16. Copia fotostática de la orden de cumplimiento No. 004 de fecha 17 de junio de 2015, suscrita por la Dra. JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO, en la que dispuso fijar fecha para la realización de diligencia de versión libre a unos postulados del Bloque Montes de María entre ellos MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, para el día 19 de junio de 2015 a las 9:00 a.m.

17. Emitiéndose de igual manera, los oficios/DNFEJT/F-12/MCG/Nos.531-532-533-534-535-536 de fecha 17 de junio de 2015, suscritos por la Dra. JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO, dirigidos a las mismas autoridades ya relacionadas en precedencia, mediante los cuales se les dio aviso de la fecha de versión libre para el día 19 de junio de 2015 a las 9:00 a.m.

18. Acta de diligencia de versión libre de los postulados reuents MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ y otros, de fecha 19 de junio de 2015, donde se deja constancia de la no comparecencia de los postulados con la asistencia de los Doctores JEANNETTE VIRGINIA CABARCAS CASTILLO fungiendo como Fiscal 10 de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional, JORGE MIGUEL NOGUERA ZAMBRANO, Abogado defensor, EDITH CECILIA ALI IBÁÑEZ Procuradora 43 Judicial Penal II y EDWIN BRAN APONTE MONROY Investigador Criminalístico IV – C.T.I.

2. Con todo lo actuado la Fiscalía considera haber cumplido con sus obligaciones procesales, con todos los llamados o avisos que se hicieron al postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, a través de diferentes medios de comunicación de los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico, así como en otros medios de cubrimiento nacional. Resalta la Delegada Fiscal, que las últimas gestiones adelantadas para dar con el paradero del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ se consignaron en el informe de policía judicial de fecha 14 de septiembre de 2015, signado por el investigador PEDRO PATERNINA CHÁVEZ, dando cuenta de las gestiones adelantadas para ubicar al Postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, que se comunicó con él, a través del abonado 321897987, quien le manifestó *"yo voy a renunciar a la ley 975 de Justicia Transicional, para acogerme a la ley 1424 de 2010, que se va acercar a la Unidad de Justicia Transicional de la ciudad de Cartagena para que le tomen una entrevista o le llene el formato para dicha desvinculación"*

La Fiscalía considera que el postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ falta al compromiso de sinceridad y honestidad, puesto que desde que manifestó voluntariamente su sometimiento a la ley de Justicia y Paz y su desmovilización colectiva el 15 de julio de 2005, se obligaba a cumplir con los compromisos adquiridos en su condición de desmovilizado postulado, lo cual no ha mostrado su voluntad para cumplir, específicamente en lo que tiene que ver con la comparecencia, y, en consecuencia, con el aporte para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas, y que este incumpliendo no es solo porque la Fiscalía no haya podido ubicarlo sino porque él no ha dispuesto actividad alguna con miras a enterarse del averiguatorio que en virtud de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz se le adelanta y del cual necesariamente tiene conocimiento. De análoga manera, la actuante Fiscal cita apartes de las sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal radicado No. 43110 de 5 de marzo de 2014, siendo Magistrado Ponente el Dr. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO y el radicado No. 34423 Magistrado Ponente Dr. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.

Expresa, igualmente la Fiscalía que como puede observarse la institución que representa ha realizado los suficientes esfuerzos en aras de ubicar, y en ultimas versionar, al postulado sin que hasta el momento se haya denotado

el ánimo del mismo de acudir a esta justicia transicional para cumplir sus deberes adquiridos, máxime frente al aspecto de la verdad para con las víctimas, sin perjuicio de la corresponsabilidad de estas de acudir al despacho para cumplir con los fines pertinentes. El señor **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, ha sido renuente a comparecer al procedimiento de Justicia y Paz para darle cumplimiento a los compromisos que adquirió cuando solicitó su postulación, por lo que solicita se excluya a dicho postulado de la lista de postulación, conforme a lo previsto en el numeral primero (1º) del artículo 11A, de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 5 de la ley 1592 de 2012.

Del traslado a las partes e intervinientes:

En desarrollo de la audiencia pública, luego de escuchar la intervención de la Fiscalía, con la exhibición de los elementos materiales probatorios que sustentaron la solicitud de exclusión del postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 11A de la Ley 975 de 2005 adicionado por la Ley 1592 de 2012, esto es, *“Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.”*, y descorrido el traslado a las partes e intervinientes, refirieron sobre el particular en razón lo siguiente:

El señor defensor Dr. JORGE NOGUERA ZAMBRANO, inicia su intervención manifestando que efectivamente se trata del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, quien está plenamente identificado, hace un recuento de la condición de postulado de su representado, considera que la Fiscalía realizó los esfuerzos necesarios para dar con su ubicación y brindarle los beneficios que ofrece la ley 975 de 2005 y *“por ningún motivo”* el postulado ARRIETA DOMÍNGUEZ, acudió a los llamados que se le hicieran en tal condición, por lo tanto, no le queda otra alternativa que dejar a la Sala las consideraciones para proferir la decisión que encuentre correspondiente.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De la competencia para resolver.

1. Sea lo primero indicar que el artículo cuarto del Acuerdo PSAA11-8035 de 2011 señala que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tiene competencia territorial para conocer de los asuntos tramitados en vigencia de la Ley 975 de 2005 y en relación con los hechos punibles cometidos en los Distritos Judiciales de: “Archipiélago de San Andrés Islas, Cartagena (exceptuando el Circuito de Simití), Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo y Valledupar (exceptuando el Circuito de Aguachica)” (destacado por la Sala).

Acorde con los planteamientos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, así como de los elementos materiales probatorios que emergen del paginario y de la solicitud de exclusión, se desprende que **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, durante su permanencia en el Frente “Héroes Montes de María”, del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia –A.U.C.-, desplegó su actuar delictivo conjuntamente con otros miembros del grupo ilegal en el área rural del municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar. Por ello, la jurisdicción, teniendo en cuenta el Acuerdo antes referido, así como el Acuerdo No. PSAA06-3321 de 2006⁷, corresponde al Distrito Judicial de Barranquilla.

2. Si bien la institución de la exclusión no tenía expresa consagración legal en el texto original de la Ley 975 de 2005, ni en sus Decretos Reglamentarios, en reiterada jurisprudencia la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema, considerando que la competencia para conocer de alguna solicitud en ese sentido proveniente de la Fiscalía General de la Nación, por estimar ausente cualquiera de los requisitos para que el postulado sea beneficiario con la pena alternativa, debe ser resuelta por la Sala de Justicia y Paz en cualquier etapa procesal⁸.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley 096 de 2011⁹, el legislador consideró necesario regular en dos nuevos artículos adicionales de la Ley

⁷ “Por el cual se crean los Circuitos Judiciales Administrativos en el Territorio Nacional”.

⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 23 de agosto de 2011, rad. 34423, M.P. Dr. José Leónidas Bustos Martínez; decisión del 22 de agosto de 2012, rad. 39162, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, entre otras. Ha expresado esa Corporación: “Cuando a través de distintos actos se exterioriza la voluntad de separarse del acuerdo transicional, se impone la exclusión. En términos procesales, ésta se define como aquella decisión en virtud de la cual, el competente, esto es, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior, “decide expulsar del trámite previsto en la Ley 975 de 2005 al postulado –procesado o condenado-, por incumplimiento de uno de los requisitos de elegibilidad, o por faltar a las obligaciones impuestas, bien por la ley, ora en la sentencia condenatoria”.

⁹ Exposición de motivos Cámara, Gaceta 690/2011.

975 de 2005 el tema de la exclusión bajo las siguientes consideraciones, entre otras:

“Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El propósito consiste en excluir del procedimiento a los postulados que únicamente han figurado de manera formal en las listas enviadas por el Gobierno Nacional, pero que no ha sido posible ubicar ni lograr su comparecencia en el proceso. Así mismo, se hace necesario excluir a los que voluntariamente desisten de someterse al proceso de justicia y paz o expresan libremente su decisión de no continuar en el proceso. También se requiere excluir del proceso a quienes no satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley, tan pronto se acredita esta situación.

La depuración del universo de postulados debe traer como consecuencia una mayor fluidez de las actuaciones, en la medida en que el esfuerzo de los diferentes equipos de trabajo de fiscales y magistrados de justicia y paz se podrá concentrar en aquellos casos en que los postulados realmente estén colaborando eficazmente con la reconstrucción de la verdad, a favor de la reparación de tantas víctimas que esperan, por fin, saber lo ocurrido con sus seres queridos (resaltado por la Sala)”^{10,11}.

Consejo Superior

Como resultado de lo anterior, la Ley 1592 de 2013 consagró en el artículo 5, que adicionó el canon 11A a la Ley 975 de 2005, la *terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de la lista de postulados*, bajo el entendido que:

¹⁰ Página Congreso de la República http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=476

¹¹ La Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-752 del 30 de octubre de 2013, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, mediante la cual se analizó la Constitucionalidad de los artículos 8° y 37 de la Ley 1592 de 2013, al referirse al tema de la exclusión señaló: “En armonía con tal propósito, se propuso crear también la figura de la “exclusión”, con la finalidad de elevar a norma jurídica una práctica ya existente a partir de los desarrollos jurisprudenciales en la materia. En efecto, tal y como se mencionó en la exposición de motivos, la Ley 975 de 2005 no había consagrado expresamente la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en sus artículos 10 y 11, razón por la cual, dicho vacío venía siendo llenado, por vía de interpretación, a través de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, dada la dinámica y complejidad de los procesos de justicia y paz, la actividad de las autoridades judiciales competentes se había mostrado tímida y cauta frente a la depuración de los postulados que no cumplían los compromisos adquiridos, lo que hacía necesario la consagración legal de la exclusión con miras a unificar los criterios de aplicación, generar un mayor nivel de confianza en los operadores jurídicos y buscar la efectividad del proceso de justicia y paz y el enfoque del mismo en las personas que están dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y contribuir a la reconstrucción de la paz, finalidad de la Ley 975 de 2005”.

“Los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:

(...)

1. *“Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley”.*

Por lo expuesto en precedencia, la competencia para conocer y resolver la solicitud de exclusión que nos ocupa, conforme a lo normado en el numeral 1° del artículo 11A de la Ley 975 de 2005 adicionada por la Ley 1592 de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 3011 de 2013, presentada y sustentada por la señora Fiscal Doce (12) Delegada de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional radica en esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.

Preliminares.

1. El ámbito de aplicación del proceso de justicia y paz se circunscribe, conforme al artículo 2 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de *“las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”.*

De lo anterior emerge que la decisión de participar y mantenerse en el proceso de justicia y paz es absolutamente voluntaria, lo cual demanda del postulado obligaciones mínimas orientadas a demostrar que mantiene latente su interés exteriorizado inicialmente con su desmovilización, en todo momento del proceso, así como en la no repetición de los hechos cometidos durante su militancia en el grupo armado organizado al margen de la ley, en aras de alcanzar los propósitos de la reconciliación nacional, la paz sostenible y la convivencia, propios del nuevo rumbo dentro de la institucionalidad del Estado de derecho. De tal manera que el incumplimiento de los compromisos y las obligaciones legales en ese

sentido apareja la consecuente pérdida de los beneficios previstos en el estatuto de justicia transicional.

Así entonces, no es suficiente con la postulación del desmovilizado por el Gobierno Nacional y que la Fiscalía haya dado inicio al procedimiento reglado en la ley 975 de 2005, sino que es trascendente que preste su concurso durante todo el trámite, cumplir en todo momento los compromisos que apareja este sistema especial de enjuiciamiento en aras de resguardar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

2. Tal y como se refirió en precedencia, el numeral 1° del artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, determina que hay lugar a la exclusión de la lista de postulados al proceso de Justicia y Paz.

“Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley”.

Sobre el particular, la Honorable Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia en decisión del 23 de agosto de 2011¹², al referirse al tema advierte:

“...La Exclusión, es el mecanismo por medio del cual la Sala con Funciones de Conocimiento de Justicia y Paz, decide expulsar del trámite previsto en la Ley 975 de 2005 al postulado ~~procesado o condenado~~, por incumplimiento de uno de los requisitos de elegibilidad, o por faltar a las obligaciones impuestas, bien por la ley, ora en la sentencia condenatoria.

[...]

la expulsión del candidato a ser beneficiado con la pena alternativa se puede producir por el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad y por las obligaciones legales o judiciales; siendo uno de los efectos de tal decisión que una vez el desmovilizado sea expulsado del proceso previsto en la Ley 975 de 2005, se deje a disposición de los despachos judiciales que lo requieran; en donde no tendrá ningún valor la eventual confesión realizada por el justiciable en el expediente transicional, pero no obstante, la información suministrada en la versión libre podrá ser considerada en la reconstrucción de la verdad histórica de lo sucedido con el accionar paramilitar.

En referencia al tiempo ha de ser claro que la exclusión se puede solicitar, analizar y decidir tan pronto se evidencie la situación mediante la cual se ponga de manifiesto el incumplimiento de algún requisito de elegibilidad u obligación legal o judicial –

¹² Radicado 34423, M.P. Dr. José Leónidas Bustos Martínez.

esto es, sin que sea necesaria la previa formulación de la imputación-, tanto en el curso del proceso como en la ejecución de la sentencia, así como en el período de prueba, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 de la multicitada ley”.

Por su parte, el Decreto 3011 de 2013, al señalar las *formas de terminación del proceso*, refiere que para efectos de dar aplicación a las causales contenidas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente:

“1. La verificación de las causales estará en cabeza del fiscal delegado, quien sólo deberá acreditar prueba sumaria de su configuración ante la Sala de Conocimiento.

(...)

Parágrafo 2. En caso de que se presente la exclusión, renuncia o muerte de un postulado al proceso penal especial de justicia y paz, de acuerdo con los artículos 11A y 11B de la Ley 975 de 2005, la Fiscalía General de la Nación informará a las víctimas de los delitos presuntamente cometidos por el postulado para que, de ser posible, puedan participar en el incidente de identificación de afectaciones causadas en el proceso que se adelante en contra de un máximo responsable del patrón de macrocriminalidad del cual fueron víctimas. En todo caso, las víctimas del postulado tendrán acceso a los programas de reparación administrativa individual de la Ley 1448 de 2011, según lo dispuesto en el artículo 48 del presente decreto”.

3. En tal sentido, en lo que respecta a las obligaciones de los postulados, contempladas en la Ley de Justicia y Paz, el no cumplimiento de las mismas, conlleva a la exclusión de la lista de postulados a quienes se hubieren acogido a este proceso especial, y a su vez a la pérdida de todas las prerrogativas y beneficios que le hubieren sido otorgados, teniendo en cuenta que no basta con la simple manifestación de voluntad de acogerse al proceso, sino que esta voluntad se debe reflejar de manera concreta en el actuar del procesado en cada una de las etapas procesales, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha expresado al respecto que: *“.....La exclusión supone expulsar del proceso transicional a quien de una forma u otra ha exteriorizado su voluntad de no someterse al mismo, bien por hacerlo de manera expresa y clara o bien por cuanto de su comportamiento se deriva un menosprecio hacia los fines del proceso, deslealtad hacia el mismo, desprecio por las víctimas, generalidades que se traducen de manera concreta en cada una de las causales consagradas en la norma transcrita.....”¹³*

¹³ Sentencia Radicado 45455 de 2015. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero.

Del caso en concreto.

1. El ente acusador a efectos de fundamentar la solicitud de exclusión, ha demostrado con los elementos materiales probatorios y evidencia física aportada, exhibidas en la vista pública, que el postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, ha desplegado un comportamiento renuente e injustificado a participar en el proceso transicional, quebrantado las obligaciones adquiridas al momento de su postulación, como lo es develar los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su permanencia en el grupo armado organizado al margen de la ley, trasgrediendo así los presupuestos de la Ley 975 de 2005, al no asistir o acudir a los diferentes llamados y citaciones a versión libre convocadas por la Fiscalía, negando así el derecho a la verdad, justicia y reparación, causal en que se fundamenta la solicitud de exclusión presentada ante esta Colegiatura, demostrando así un comportamiento injustificado a participar activamente en este proceso especial.

Con todo el vasto despliegue y las gestiones encaminadas a obtener la comparecencia del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, tales como citaciones, llamados, edictos difundidos a través de diversos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, rastreos a través de distintas instituciones del Estado, averiguaciones de los funcionarios Investigadores Criminalísticos de la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional, ya referidos en el cuerpo de esta decisión, ello no fue posible, lo cual, bajo la consideración de esta Sala, una vez desmovilizado y/o postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, debió estar atento a cualquier requerimiento en ese sentido, lo que pone de presente su evidente desinterés a acceder a los beneficios que concede la Ley de Justicia y Paz.

Es indudable que el compromiso de contribuir con la verdad, la justicia y la reparación integral, se materializan con voluntad del postulado en aportar concretamente con su participación activa en el proceso transicional, donde inicialmente con la inasistencia injustificada o renuencia a continuar con las versiones libres como lo expone la Fiscalía, en este caso, siendo esta la fase esencial y primaria del proceso transicional especial, se advierte la falta de interés por parte del postulado a colaborar en el esclarecimiento de los hechos cometidos con ocasión a su permanencia dentro del grupo armado

ilegal. En efecto, así lo ha sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando advierte:

“Así, que la normatividad transicional, supone que sus beneficiarios son tanto el Estado como las víctimas, pero también los ofensores: el Estado por cuanto se consolida como Estado de Derecho y asume el monopolio de la fuerza y se aproxima a la consecución de una paz sostenible; las víctimas por conocer la verdad de la causa de su dolor y por ser reparadas integralmente; y los victimarios ya que en su favor, el Estado renuncia a una parte de la pena ordinaria, a cambio de que los postulados se comprometan con aquello que es exigido...¹⁴”

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Sala de Conocimiento, encuentra debidamente fundamentada la solicitud de exclusión como postulado a la ley de justicia y paz de MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, ya que, se adecua en la causal contemplada en el inciso 1° del artículo 11 A de la ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 5° de la ley 1592 de 2012, por renuencia e incumplimiento de los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, siendo evidente el comportamiento desinteresado y la falta de compromiso con el proceso transicional, *“pues la omisión reiterada demuestra que no hay voluntad de contribuir con los perjudicados, lo cual envía un mensaje equivocado al conglomerado social que, a cambio de generar algún grado de impunidad, espera que esos derechos a la verdad, justicia y reparación sean efectivos y en un término prudencial.¹⁵”*

Consejo Superior de la Judicatura

Con todo, no podemos dejar de advertir, igualmente, que si bien constituye deber de la Fiscalía General de la Nación desplegar los esfuerzos necesarios a fin de tratar de dar con la ubicación de los postulados, también es deber de los postulados, conforme a sus compromisos y sometimiento, estar atentos al decurso de todo el proceso de aplicación de la ley de justicia y paz, y prestar los concursos necesarios de acuerdo con ello.

En este orden de ideas es procedente la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación, como causal para declarar la exclusión de la lista de postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 del postulado MARIO

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 23 de agosto de 2011, radicación N° 34423 M.P. Dr. José Leónidas Bustos Martínez.

¹⁵ Sentencia N° 41.217. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho

ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ, por cumplirse los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para declarar la terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, y por consiguiente su exclusión de los beneficios que le otorgaba esta ley.

En cuanto a las posibles víctimas aduce la Fiscalía que no existe informe que hubiesen reportado serlo como consecuencia del comportamiento desplegado por el postulado ARRIETA DOMÍNGUEZ, con ocasión de la militancia en el grupo armado ilegal, tampoco se registran antecedentes penales en contra del postulado MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ.

V. OTRAS DECISIONES.

1. Lo aquí decidido deberá ponerse en conocimiento inmediato, por parte de la Secretaría de esta Sala de Justicia y Paz, a la Dirección de Fiscalías Nacionales y a la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, para que se realicen las investigaciones que correspondan por hechos que resulten presuntamente atribuibles al mencionado postulado, en este caso la Fiscalía ha advertido que para el momento de la solicitud no se le encontraron investigaciones en curso al postulado ARRIETA DOMÍNGUEZ, pero no obstante ello, la Sala direcciona a la Fiscalía General de la Nación, para que se ahonde en las averiguaciones correspondientes en este orden.

2. La Fiscalía General de la Nación, deberá compulsar copias a la justicia ordinaria, a fin de que se investigue el presunto delito de Concierto para Delinquir en el que pudo incurrir el postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**.

3. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 35 del Decreto Reglamentario 3011 del 26 de diciembre de 2013, "*Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012*", se insta a la Fiscalía General de la Nación para que informe "*a las víctimas de los delitos presuntamente cometidos por el postulado para que, de ser posible, y de serlo así, puedan participar en el incidente de identificación de afectaciones causadas en el proceso que se adelante en contra de un máximo responsable del patrón de macro-criminalidad del cual fueron víctimas*", resaltando que, en todo caso "*tendrán acceso a los programas*

de reparación administrativa individual de la Ley 1448 de 2011, según lo dispuesto en el artículo 48 del presente Decreto”.

4. En firme la presente decisión, comuníquese por Secretaría de esta Sala, la determinación adoptada en relación con el postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, de condiciones civiles registradas al inicio de esta decisión, al Ministerio del Interior para lo de su cargo y competencia.

5. De acuerdo al deber judicial de memoria a que alude el artículo 56A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, manténgase copia de la actuación en el archivo de la Secretaría de esta Sala dispuesto para tales efectos, bajo la consideración que la información recabada en esta actuación *“podrá ser considerada en la reconstrucción de la verdad histórica de lo sucedido con el accionar paramilitar”*¹⁶

6. En todo caso la terminación del proceso de justicia y paz reactiva el término de la prescripción de la acción penal.

No obstante que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 Decreto 3011 de 2013, Parágrafo 3.^o, *“Frente al auto que defina la renuncia del postulado al procedimiento especial de justicia y paz, no procederá recurso alguno”*; teniendo en cuenta la trascendencia del asunto, en consideración a que la Ley 1592 de 2012 alude a que el recurso de apelación procede *“contra el que decide sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz”*, como acontece en este caso, y, en aras de garantizar el derecho a la doble instancia¹⁷, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

¹⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 23 de agosto de 2011, radicado 34423. M.P. Dr. José Leónidas Bustos Martínez.

¹⁷ Derecho a la impugnación recogido en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política. Sobre el particular la Honorable Corte Constitucional de tiempo atrás ha venido refiriendo a la garantía de la doble instancia en los siguientes términos: *“El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente, se constituye en una piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de él se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado debido proceso. Así, en materia penal, resulta de singular importancia que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.(..)*

Ahora bien, conviene aclarar que para la Corte el principio de la doble instancia, a la luz de los preceptos constitucionales, reviste el carácter de fundamental, toda vez que constituye una garantía del debido proceso y, a su vez, de la función judicial”. Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1006, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

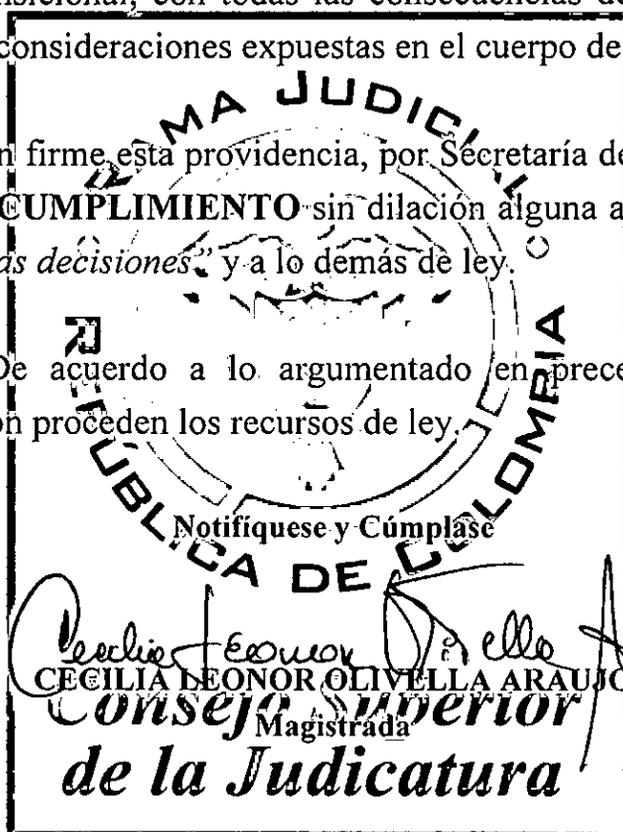
En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Barranquilla**, en su Sala de Conocimiento de Justicia y Paz,

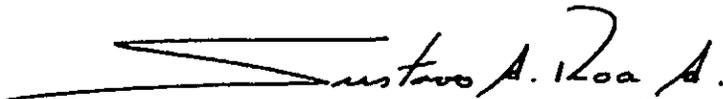
RESUELVE:

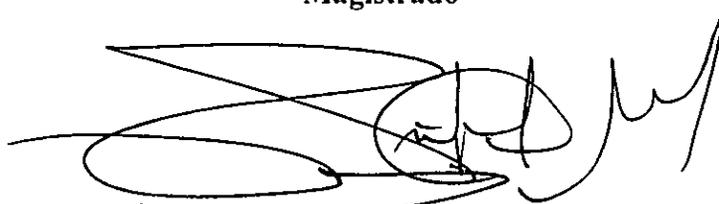
PRIMERO: ORDENAR LA EXCLUSIÓN del trámite y beneficios de la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012 y demás decretos reglamentarios, al postulado **MARIO ENRIQUE ARRIETA DOMÍNGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.871.658 expedida en María la Baja (Bolívar), en los términos solicitados por la Fiscalía Doce (12) Delegada de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional, con todas las consecuencias de ley pertinentes y conforme a las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta decisión.

SEGUNDO: En firme, esta providencia, por Secretaría de esta Sala y por la Fiscalía, **DAR CUMPLIMIENTO** sin dilación alguna a lo dispuesto en el acápite "*V. Otras decisiones*" y a lo demás de ley.

TERCERO: De acuerdo a lo argumentado en precedencia, contra la presente decisión proceden los recursos de ley.




GUSTAVO A. ROA AVENDAÑO
 Magistrado


JOSÉ HAXEL DE LA PAVA MARULANDA
 Magistrado